

Santiago, veinticinco de mayo de dos mil veintidós.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que comparece el abogado Ernesto Pacheco González, en representación de “MEGAMEDIA S.A.” (en adelante “MEGAMEDIA”), quien interpone recurso de apelación o de reclamación judicial en contra del Consejo Nacional de Televisión (en adelante también CNTV o “el Consejo”), en conformidad al artículo 34 de la Ley N°18.838, por la dictación del Ordinario N° 308, de 29 de marzo de 2022 ,[en adelante, el “Ord. 308/2022”], que rechazó los descargos efectuados por dicha parte e impuso la sanción de multa de 50 UTM, contemplada en el artículo 33 N°2 de la Ley de Televisión, al supuestamente vulnerar el correcto funcionamiento de los servicios de televisión, establecido en el artículo 1° de la Ley N ° 18.838, configurada por haber emitido" los días 06 y 07 de octubre de 2021, en horario de protección de niños y niñas menores de 18 años de la Telenovela "Verdades Ocultas, exhibiéndose secuencias con contenidos inapropiados para menores de edad, pudiendo con ello afectar el normal desarrollo de su formación espiritual e intelectual.

Explicita que dicha Telenovela se trata de una obra dramática, de ficción, en que los actores representan un rol,



que dista de la realidad, la que incluso puede superarla. Dado el tiempo en que la Teleserie se encuentra al aire —más de 4 años—, es evidente que se trata y así lo entiende la audiencia y el propio CNTV, de una obra de ficción dramática, con situaciones ficticias y ajeno a la realidad.

Indica que lo sostenido por la recurrida, como primer cargo formulado fue, que dicho programa trata de contenidos presumiblemente violentos, que dicen relación con un hecho de ficción, esto es, la recreación dramatizada del secuestro, muerte y exhibición del cadáver de un personaje de la trama. Así sostiene que *“el episodio de violencia observado durante la emisión del programa sería susceptible de generar perturbación y afectar la integridad psíquica de los telespectadores menores de edad que pudieran haber estado visualizándolos, en tanto el efecto de un estímulo como el observado, eventualmente podría generar síntomas de ansiedad, temor y afectación del sueño, alterando con ello las condiciones actuales de bienestar de los menores de edad. En efecto, habría evidencia acerca de que el contenido de los medios puede tener efectos negativos sustanciales en el bienestar emocional de los niños y que estos efectos a veces pueden perdurar por largos períodos de tiempo; en particular, el efecto del miedo introducido por los medios masivos incluso puede llegar a más de un año, lo que daría*



cuenta del impacto que puede tener para el desarrollo psíquico de un menor visionar imágenes como las descritas”.

En consecuencia, no es posible hablar de violencia excesiva, en la medida que no se trata de actos que vayan más allá de aquellos que resultan del ímpetu criminal y que no alcanzan la esfera del ensañamiento y solo se acusó por violencia y no “violencia excesiva”, de manera que se reprimió una conducta lícita y legítima de ser emitida en horario de todo espectador o de protección y que se dan en el contexto de la trama propia de dicha telenovela.

Sostiene que como segunda imputación es haberse emitido en horario de protección al menor, aclarando que se trata de un horario de responsabilidad compartida, por lo que debe ser bajo la supervisión de personas adultas

Agrega, como tercera imputación que las imágenes exhibidas podrían afectar el normal desarrollo de la formación espiritual e intelectual de menores, la que se formula solo en términos de “potencialidad” lo que no sólo no se corresponde con las normas objetivas cuyo cumplimiento se imponen a las concesionarias sino que, además, se compromete la certeza jurídica que deben tener para poder guiarse y tener claridad respecto a lo que pueden producir, grabar y exhibir.



Señala que los hechos en que se fundan las acusaciones y la sanción impuesta, en definitiva, carecen de una entidad o gravedad suficiente, pues todos son potencialidades, simples hipótesis y, especialmente, carecen de la más mínima certeza en cuanto a su ocurrencia y, en el peor de los casos, de llegar a ocurrir, se trata de situaciones aisladas, de “síntomas de ansiedad, temor y afectación del sueño”, que serán circunstanciales y que no pueden considerarse como de una entidad y permanencia en el tiempo tal y menos respecto de los cuales haya una relación de causalidad y necesidad, en términos tales que, sean atribuibles a los contenidos emitidos y reprochados y que terminen afectando o comprometiendo un proceso de formación, que de suyo y por su propia definición es lato, complejo y está determinado por una serie de factores.

Alega en su caso la concurrencia de un error excusable y no sancionable, dado que si exhibió dichas imágenes, fue porque, erróneamente y de buena fe, interpretó o concluyó que con su exhibición, no se infringía la normativa vigente, lo que se condice con exhibir imágenes cuestionadas en sólo dos capítulos de una Teleserie que tiene más de 4 años en pantalla.

Sostiene, como primer capítulo de ilegalidad, la infracción al Principio de Culpabilidad y el Derecho a un Debido, Justo y Racional Proceso, en cuanto que no Hay Pena Sin Culpa y que



se verifica la “No Exigibilidad de Otra Conducta”, ya que no se puede reprochar lo que no se puede exigir.

Afirma que los principios inspiradores del orden penal contemplados en la Constitución Política de la República han de aplicarse, por regla general, al derecho administrativo sancionador, puesto que ambos son manifestaciones del ius puniendi propio del Estado.

Asevera que se sanciona a su representada por haber ejercido su libertad de expresión y programación al emitir imágenes lícitas y legítimas, que no estaban proscritas por ninguna de las normas que el propio CNTV se ha dado en la materia para proteger dicha formación valórica e intelectual de niños y adolescentes. Le exige y requiere para no sancionarla, una conducta que no le es exigible, en forma alguna, que se autocensure y elimine las imágenes que reprocha. En otras palabras, la sanciona por haber cumplido su rol como medio de comunicación social y ejercer su libertad de programación.

En consecuencia, asegura que por haberse infringido la Garantía de Culpabilidad de que goza MEGAMEDIA y que obliga al acusador y sancionador a probar que se incurrió en un actuar culpable y negligente y, además, que no es posible exigir otra conducta a esa parte como aquella que pretende el CNTV, que no es otra que autocensurar su propia libertad de



programación respecto de contenidos lícitos y no proscritos. Máxime considerando que ella ni siquiera es requerida por el artículo 1º de la Ley de Televisión.

Como segundo capítulo de ilegalidad, alega la Infracción a la Garantía de Tipicidad y la Ausencia de Sustento del Acto Administrativo. Aquello implica que el ilícito se configure a partir de una apreciación y valoración objetiva -que se encuadre en la norma- y no simplemente en una conclusión sujeta al parecer o a la sensibilidad mayor o menor de quien la emite o valora.

Cuestiona, entonces, que no precise las conductas concretas del ilícito en el que supuestamente no se debió incurrir, de manera de evitar la sanción que se le ha impuesto.

Adiciona que habiendo existido por parte del CNTV en su Ordinario 308/2022, una clara y precisa determinación de las acciones o conductas que llenan o colmatan el denominado los contenidos “inapropiados para menores” y no estando definidos por la Ley de Televisión en su artículo 1º, a efectos de que MEGAMEDIA pudiera dirigir sus futuras emisiones respetando la norma supuestamente incumplida y sancionada, se puede sostener que carece legitimidad y sustentabilidad el acto administrativo terminal.



Argumenta, como tercer capítulo de ilegalidad, que se ha infringido la Garantía del Debido Proceso al Negarse a MEGAMEDIA el Derecho a Rendir Prueba y el Principio de Contradictoriedad.

En efecto, expresa que habiéndose solicitado un término probatorio para acreditar los hechos en que esa Concesionaria fundamentó sus descargos, dicha petición fue denegada por parte del CNTV, sin otro argumento que, no sea el hecho que esa parte no habría controvertido en lo sustancial el reproche o que su punto a probar recaería sobre la calificación jurídica de los hechos, como si tal calificación no requiriese, en forma previa, el establecimiento de los hechos basales y el contenido fáctico no fuere necesario y esencial para efectuar una correcta calificación jurídica, lo que claramente no se corresponde con la realidad.

Por lo anterior, se ha afectado el derecho de rendir las probanzas que estimara pertinente para sustentar sus dichos y afirmaciones, en especial, rendir prueba testimonial.

El cuarto capítulo de ilegalidad invocado, lo sustenta en la infracción Principio de Lesividad o Nocividad, esto es, al sancionar sin considerar que la finalidad y espíritu del bien jurídico tutelado fue preservado y satisfecho, dada la manera o forma que asumió la emisión de las imágenes lícitas, legítimas y



con un fundamento y justificación suficiente en el guión de la obra, de acuerdo y en conformidad a la propia normativa que el CNTV ha dictado para proscribir por ilegítimos y dañinos ciertos contenidos.

Concluye solicitando que se acoja el recurso de apelación o reclamo de ilegalidad jurisdiccional en contra del acto administrativo contenido en el Ordinario 308/2022 del CNTV, de 29 de marzo de 2022, que ha impuesto una multa de 50 UTM; dar por establecida la ilegalidad e invalidarlo, disponiendo la decisión adecuada al caso, conforme a los límites de su competencia en un reclamo de ilegalidad.

SEGUNDO: Que informando el recurso el abogado don Antonio Madrid Arap, en representación del Consejo Nacional de Televisión, quien solicita su rechazo. Sostiene que toda sanción que se imponga es en razón del incumplimiento del deber de cuidado establecido por el artículo 12 en relación con el artículo 1° de la Ley N° 18.838, que obliga a los servicios de televisión a respetar el principio constitucional del correcto funcionamiento.

Refiere que la conducta infraccional imputada se encuentra plenamente acreditada en autos. Afirma que, en los fundamentos expresados en el Acuerdo de Consejo, de 14 de marzo de 2022 (Ordinario 308/2022), se sancionó a MEGA,



por infracción al deber de cuidado que impone el artículo 1° de la Ley. 18.838, por cuanto en los capítulos de la Teleserie “Verdades Ocultas” emitidos los días 06 y el 07 de octubre de 2021, se habría vulnerado la formación espiritual e intelectual de la niñez y la juventud; conducta que debe considerarse particularmente grave, en tanto se pone en riesgo la integridad y bienestar de los menores de edad, quienes se encuentran en una situación especial de protección.

Señala que el estándar general de especial protección de los menores de edad en el mercado regulado de la televisión, cumple de acuerdo a las exigencias de Convención Interamericana de Derechos Humanos, ya que el Estado de Chile a través de la Ley N° 18.838, fijó un régimen especial de protección de los menores de edad, que establecen una serie de reglas para el mercado regulado de la televisión, que busca salvaguardar el bienestar, el desarrollo y el interés superior de niños y niñas. En este sentido, el artículo 1° de la Ley, al definir lo que se entenderá por correcto funcionamiento de los servicios de televisión, incluye expresamente entre los bienes jurídicos protegidos la formación espiritual e intelectual de la niñez y la juventud; disposición que a su vez debe ser interpretada en relación con el deber implícito de respetar, a través de la programación, los derechos fundamentales de los



menores de edad y particularmente aquellos derechos consagrados en la Convención de los Derechos del Niño.

Explicita que dando cumplimiento a las directrices establecidas en la Ley N° 18.838 y en la Convención sobre los Derechos de los Niños, en marzo de 2016, el Consejo Nacional de Televisión acordó un texto reglamentario denominado Normas Generales sobre Contenidos de las Emisiones de Televisión (NGCET), que en su parte medular, tienen por propósito fijar un marco regulatorio que proteja a los niños «contra toda información y material perjudicial para su bienestar». En este sentido, el reglamento orbita fundamentalmente en torno a lo dispuesto en el artículo 2° de las Normas Generales, que estatuye una franja horaria denominada «horario de protección», que el artículo 1° define como aquel «dentro del cual no podrán ser exhibidos contenidos no aptos para menores de 18 años que puedan afectar la formación espiritual e intelectual de la niñez y la juventud», y que media entre las 06:00 y las 22:00 hrs.

Asevera que la concesionaria exhibió contenidos inadecuados para menores de edad dentro del horario de protección, por lo que resulta razonable sostener una presunción de afectación a la formación de los niños, en base a estudios científicos que dan cuenta de aquello.



Conforme consta en el Acta de Acuerdo del Consejo que sancionó a MEGA, por la exhibición de la telenovela “Verdades Ocultas” los días 06 y 07 de octubre de 2021, la concesionaria exhibió los dos capítulos que constan de las secuencias audiovisuales ya referidas, cuyos contenidos son de naturaleza violenta, emitiéndolos dentro del horario de protección de menores de edad, lo que podría ser ciertamente nocivo para el desarrollo psíquico de la teleaudiencia infantil presente al momento de las emisiones. Esto, por cuanto ambos capítulos de la teleserie exhiben escenas que entrañan una potencialidad nociva para el desarrollo psíquico de la teleaudiencia infantil presente al momento de la emisión, en cuanto la exposición a tales situaciones anómalas no sólo podrían familiarizar a los menores frente a ellas, insensibilizándolos contra el fenómeno de la violencia, sino que además puede conllevar el riesgo de que dichas conductas pudieran ser emuladas como una forma de interactuar con el resto, especialmente como una forma de resolver conflictos interpersonales, afectando presumiblemente de esa manera su proceso de socialización primaria -y hasta secundaria-.

Argumenta que según quedó consignado en el Considerando Décimo Cuarto del Ordinario N° 308/2022, de acuerdo a los datos otorgados por la empresa Kantar Ibope



Media 3, respecto al capítulo exhibido el día 06 de octubre de 2021 había aproximadamente 28.900 menores de edad, de los cuales 5.500 se encontraban en el rango etario entre los 4 y 12 años de edad. Por su parte, el capítulo exhibido el día 07 de octubre de 2021 habría sido observado por 37.900 menores de edad, de los cuales 31.800, se encontraban en el rango etario entre los 4 y 12 años de edad, respecto de quienes este tipo de contenidos podría resultar especialmente impactante y/o traumático. Refuerza la posible afectación con cita de informes especialistas que aluden a conductas de los niños.

Adiciona, que aquello cobra mayor gravedad si se considera que la Concesionaria fue sancionada previamente por el CNTV con multa de 100 UTM en Acuerdo de fecha 27 de mayo de 2019, multa de 150 UTM en Acuerdo de 24 de junio de 2019, y multa de 50 UTM en Acuerdo del 02 de noviembre de 2020, por la emisión –dentro del horario de protección- de la misma telenovela “Verdades Ocultas”, cuyo contenido es reprochado en el presente procedimiento administrativo, y precisamente en virtud de la misma causal de afectación a la formación espiritual e intelectual de la niñez y la juventud, por lo que no es la primera vez que se efectúa un cuestionamiento a escenas de esta teleserie. Cita al respecto el fallo de esta Corte, en causa Rol N° 729-2020, que rechazó el recurso de



reclamación deducido por MEGA en contra de un Acuerdo Sancionatorio del CNTV que la condenó a la multa de 50 UTM, por la emisión de un capítulo de la teleserie “Verdades Ocultas”, por la exhibición de contenidos violentos dentro del horario de protección, vulnerando la formación espiritual e intelectual de la niñez y la juventud, de acuerdo a lo dispuesto en el art. 1º de la Ley N° 18.838.

Reafirma, que el recurso que estatuye el art. 34 de la Ley N° 18.838 no es para que este Tribunal de Alzada se pronuncie como superior jerárquico del CNTV (órgano constitucional autónomo, que no forma parte del Poder Judicial), sino como un ejercicio de la potestad con que cuentan los tribunales para revisar la legalidad de los actos administrativos en virtud del principio de impugnabilidad que consagra el artículo 15 de la Ley N° 19.880.

Precisa que en la formulación de cargos y el Acuerdo de Sanción en ningún momento, se refieren a que en las secuencias audiovisuales cuestionadas del capítulo de la teleserie fiscalizado se observaría “violencia excesiva”. El procedimiento administrativo substanciado ante el CNTV, que culminó en la imposición de una multa para MEGA, dice relación con la pesquisa de dos capítulos de la teleserie, en el que se observaron elementos violentos y que pudo ser visionada por



una audiencia menor de edad, los que tendrían la entidad suficiente para generar perturbación y afectar la integridad psíquica de los telespectadores menores de edad que pudieran haber estado visualizándolos, afectando con ello su formación espiritual e intelectual.

En cuanto a la supuesta arbitrariedad alegada, indica que no se observa de qué forma el Consejo habría desplegado una conducta de estas características, toda vez que ha obrado con estricto apego a las prerrogativas constitucionales y legales que se le han entregado, motivando y fundando el acto que formula cargos a la concesionaria. Más aun la concesionaria no ha aportado –ni en sede administrativa ni judicial- antecedentes que den cuenta un ejercicio abusivo de las potestades del Consejo. Lo que sí ha quedado demostrado es que, tanto la formulación de cargos como el acuerdo sancionatorio del CNTV se sustentan en diversos estudios que demuestran que la observación por parte de menores de edad de imágenes violentas, angustiosas y sangrientas podría provocar consecuencias en su integridad emocional.

Argumenta que respecto de la denegación de la apertura de un término probatorio en este caso, al acreditar el Consejo que la concesionaria emitió los contenidos reprochados en horario de protección de los menores de edad, limitándose, en



sus descargos, a cuestionar la calificación jurídica de los mismos por parte de este Consejo, estimó innecesario abrir un término de prueba de acuerdo al Considerando Vigésimo del Ordinario N° 308 de 29 de marzo de 2022.

Indica que la sanción impuesta es proporcional a la infracción cometida, considerando la gravedad y circunstancias del hecho que se le imputa. Agrega el hecho de tener alcance nacional, con un alto nivel de audiencia de las emisiones objeto del acuerdo sancionatorio y la previsibilidad de la infracción, por cuanto los contenidos fiscalizados corresponden a escenas de una producción dramática grabada y editada por la concesionaria, que es exhibida dentro del horario de protección de niños y niñas menores de 18 años. Más aun teniendo presente las tres sanciones anteriores por exhibir contenidos inadecuados para una audiencia en formación televisión (una de las cuales es por la emisión de la misma teleserie y misma causal infraccional, Rol ICAS N° 729-2020), lo que da cuenta de una evidente situación de reincidencia y que la Ley N° 18.838 expresamente dispone que las infracciones cometidas dentro del horario de protección habrán de considerarse especialmente graves, por lo que la sanción no sólo se encuentra ajustada a derecho, sino también es proporcional al juicio de reproche.



Finalmente, respecto de los elementos “alcance y reincidencia”, hace presente que el artículo 33 de la Ley 18.838, por tratarse de una concesionaria de alcance nacional y reincidente en la infracción, la sanción pudo alcanzar una multa de 2.000 UTM, y el Consejo, estimando las circunstancias concurrentes en el caso, impuso una sanción de sólo 50 UTM, es decir, sólo el 2,5% del máximo posible.

TERCERO: que son hechos establecidos los siguientes:

- a) Que la reclamante fue sancionada al pago de una multa por la cantidad de 50 UTM, por haber infringido el artículo 1° de la Ley N° 18.838.
- b) Que la sanción fue aplicada por exhibir la Teleserie “Verdades Ocultas”, los días 6 y 7 de octubre del año 2021, en horario 15,29,37 a 16,34,18 horas, la primera; y de 15,30,32 a 16,31,05 horas, la segunda;
- c) El día 10 de enero de 2020, se formuló a Mega, por el siguiente cargo: *“supuesta infracción al correcto funcionamiento de los servicios de televisión establecido en el artículo 1 de la Ley 18.838, hecho que configuraría por la exhibición, en horario de protección de niños y niñas menores de 18 años, de la telenovela Verdades Ocultas, los días 6 y 7 de octubre de 2021, donde serían exhibidas secuencias con*



contenidos presumiblemente inapropiados para menores de edad, pudiendo lo anterior afectar el normal desarrollo de su formación espiritual e intelectual.”

CUARTO: Que, para resolver el asunto de conocimiento a esta Corte, debe traerse a colación, las normas atinentes a la materia: El primero, el artículo 1º inciso de la Ley N°18.838, instituye el denominado “Consejo Nacional de Televisión” y le asigna potestades de fiscalización y supervigilancia para el correcto funcionamiento de los servicios de televisión, fijando para dicho efecto, las pautas de conducta que deben observar los entes fiscalizados y, entre ellos, los operadores de televisión. En su inciso 1º, la norma citada dispone: *“El Consejo Nacional de Televisión, en adelante ‘el Consejo’, es la institución autónoma de rango constitucional creada por el inciso sexto del numeral 12 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, cuya misión es velar por el correcto funcionamiento de todos los servicios de televisión que operan, u operen a futuro, en el territorio nacional. Estará dotado de personalidad jurídica y de patrimonio propio, y se relacionará con el Presidente de la República por intermedio del Ministerio Secretaría General de Gobierno.”*



Los incisos 3º y 4º agregan, en lo pertinente: *“Para los efectos de velar por el correcto funcionamiento de los servicios de televisión, tendrá su supervigilancia y fiscalización, en cuanto al contenido de las emisiones que a través de ellos se efectúen, salvo en las materias técnicas normadas y supervisadas por la Subsecretaría de Telecomunicaciones.*

Se entenderá por correcto funcionamiento de estos servicios el permanente respeto, a través de su programación, de la democracia, la paz, el pluralismo, el desarrollo regional, el medio ambiente, la familia, la formación espiritual e intelectual de la niñez y la juventud, los pueblos originarios, la dignidad humana y su expresión en la igualdad de derechos y trato entre hombres y mujeres, así como el de todos los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes.”

A su vez, el inciso 6º de la misma norma establece:

“Asimismo, se entenderá que el correcto funcionamiento de esos servicios comprende el acceso público a su propuesta programática y que en la difusión de ella, en la forma y de la manera que cada concesionario determine, se cautelen los derechos y principios a que hacen referencia los incisos anteriores.”



El artículo 12 de la misma ley, establece que el Consejo Nacional de Televisión tendrá entre otras funciones y atribuciones: *“a) Velar porque los servicios de radiodifusión televisiva de libre recepción y los servicios limitados de televisión se ajusten estrictamente al ‘correcto funcionamiento’, que se establece en el artículo 1º de esta ley”; (...) f) Regular, dentro del ejercicio de sus facultades, la transmisión y recepción de la televisión por satélite; i) Aplicar, a los concesionarios de radiodifusión televisiva y de servicios limitados de televisión, las sanciones que correspondan, en conformidad a las normas de esta ley; (...) l) Establecer que los concesionarios deberán transmitir a lo menos cuatro horas de programas culturales a la semana, entendiéndose por tales aquellos que se refieren a los valores que emanen de las identidades multiculturales existentes en el país, así como los relativos a la formación cívica de las personas, los destinados al fortalecimiento de las identidades nacionales, regionales o locales, como fiestas o celebraciones costumbristas y aquellos destinados a promover el patrimonio universal y, en particular, el patrimonio nacional.”*

Agrega este mismo literal que *“El Consejo dictará las normas generales para sancionar la transmisión de programas que contengan violencia excesiva, truculencia, pornografía o*



participación de niños o adolescentes en actos reñidos con la moral o las buenas costumbres. Asimismo, el Consejo deberá dictar las normas generales destinadas a impedir que los menores se vean expuestos a programación y publicidad que pueda dañar seriamente su salud y su desarrollo físico y mental (...).”

En tercer término, el artículo 33 de la Ley N° 18.838 contempla las siguientes sanciones, aplicables en caso de infracción de las normas de la misma ley:

“1.- Amonestación.

2.- Multa no inferior a 20 ni superior a 200 unidades tributarias mensuales, en caso de tratarse de concesionarias de servicios de radiodifusión televisiva o permisionarios de servicios limitados de televisión regionales, locales o locales de carácter comunitario. Para el caso de concesionarias de servicios de radiodifusión televisiva o permisionarios de servicios limitados de televisión de carácter nacional, las multas podrán ascender hasta un máximo de 1.000 unidades tributarias mensuales. En caso de reincidencia en una misma infracción, se podrá duplicar el máximo de la multa.

3.- Suspensión de las transmisiones, hasta por un plazo de 7 días, tratándose de infracción grave y reiterada.

4.- Caducidad de la concesión (...).”



Finalmente, el artículo 34, prescribe:

“El Consejo, antes de aplicar sanción alguna, deberá notificar a la concesionaria del o de los cargos que existen en su contra. Esta tendrá el plazo de cinco días hábiles para formular sus descargos y solicitar un término de prueba para los efectos de acreditar los hechos en que funde su defensa. Vencido este plazo, sin descargos o existiendo éstos, sin que se haya decretado un término probatorio, o vencido dicho término, se haya rendido prueba o no, el Consejo resolverá sin más trámites. La prueba y las notificaciones se regirán por las normas establecidas en el artículo 27 de esta ley.

La resolución que imponga amonestación, multa o suspensión de transmisiones será apelable ante la Corte de Apelaciones de Santiago, y la resolución que declare la caducidad de una concesión será apelable ante la Corte Suprema. La apelación deberá interponerse dentro de los cinco días hábiles siguientes a la fecha de notificación de la resolución, ser fundada, y para su agregación a la tabla, vista y fallo se regirá por las reglas aplicables al recurso de protección.”

QUINTO: Que, si bien es efectivo, que el artículo 34 de la Ley N° 18.838, denomina como “apelación” al arbitrio procesal que allí se concede, no obstante, por su naturaleza, éste es un reclamo de ilegalidad, siendo de competencia de



esta Corte el control de legalidad de la resolución dictada por la autoridad reguladora competente; y por tanto para proceder a invalidar el acto administrativo, solo es posible en la medida que dicho acto sea ilegal.

SEXTO: Que la sanción aplicada al recurrente, de acuerdo con los cargos formulados se funda en que, en las imágenes de la teleserie antes mencionada “fueron exhibidas por la concesionaria, en una franja horaria de protección de menores de edad, una serie de contenidos que podrían afectar negativamente el proceso del normal desarrollo de la personalidad de aquéllos, destacando particularmente, el hecho de que durante la emisión denunciada fueron utilizados reiteradamente términos violentos y fuertes de dar muerte a una persona, con elementos de gravedad e intensidad, pudiendo esto generar en los menores-, atendida la especial naturaleza de dichos contenidos-, sentimientos de impotencia, indefensión, horror y miedo intenso, conllevando incluso la posibilidad de que sufran pesadillas, producto de tales contenidos inapropiados para ellos”; que “los contenidos audiovisuales fiscalizados podrían afectar negativamente la formación espiritual e intelectual de la niñez y la juventud, y con ello incurrir la concesionaria en una infracción al correcto funcionamiento de



los servicios de televisión, que se encuentra permanentemente obligada a observar en sus emisiones”

SEPTIMO: Que tales imágenes exhibidas en horario de protección al menor, claramente resultan potencialmente nocivas para estos y que van a afectar el desarrollo psíquico de la teleaudiencia infantil, pues se trata de imágenes inadecuadas, de marcada violencia, que apuntan a la cruel situación del secuestro, asesinato y exhibición del cadáver del personaje denominado “Eliana.”

OCTAVO: Que de lo antes expuesto, se constata que, la recurrente, efectivamente, infringió las normas que objetivan el concepto de “correcto funcionamiento de los servicios de televisión” contemplado en la ley, que incluye -entre otros aspectos- el permanente respeto de la formación espiritual e intelectual de la niñez, lo que ha afectado el interés superior de los menores y con ello las disposiciones de la Convención Internacional de los Derechos del Niño, al emitir contenidos inadecuados e incompatibles en el horario de protección de niños y niñas, poniendo así en riesgo el derecho a la salud física y psíquica de éstos.

NOVENO: Que, en consecuencia, la reclamante ha infringido el deber de cuidado en el desempeño de sus funciones, cuyos límites vienen definidos por la sujeción al



señalado principio del “correcto funcionamiento del servicio” y cuyos contornos, en lo que a este recurso concierne, se describen en el artículo 1º de la ley como “el permanente respeto, a través de su programación, de (...) la familia, la formación espiritual e intelectual de la niñez y la juventud (...)”, entre otros bienes jurídicos protegidos.

DECIMO: Que, de lo que se viene razonando, aparece que las argumentaciones que funda la reclamación, deben desecharse, pues, efectivamente, la reclamante incurrió en la infracción del artículo 1º de la Ley N° 18.838, el inciso cuarto, relativo a : “*el respeto a la formación espiritual e intelectual de la niñez y la juventud*”, encontrándose la reclamada dentro de los atribuciones y deberse que le impone tanto la Constitución Política de la República como la Ley N° 18.838; cargos que, por lo demás, no fueron desvirtuados.

UNDECIMO: Que por otra parte, la infracción que se le reprocha a MEGAMEDIA, radica en la situación de peligro que generó al transmitir los capítulos cuestionados en un horario de protección a niñas y niños menores de edad, con contenidos de carácter sensacionalista, que resultan idóneos in abstracto para afectar o perturbar, en forma imprudente, la integridad psíquica de los telespectadores menores de edad, justamente es lo que debe ser debidamente resguardado, como



lo señala el Preámbulo de la Convención de los Derechos del Niño, el artículo 3º, en cuanto reconoce como principio el interés superior del niño; y finalmente el artículo 19 de la Convención Americana de Derechos Humanos.

DUODÉCIMO: Que en cuanto a la infracción del derecho a un debido proceso y al principio de lesividad, del análisis de los antecedentes traídos a conocimiento de esta Corte no se observa lesión alguna a la mencionada garantía y al señalado principio, pues, al tenor de lo dispuesto por el artículo 10 de la Ley N° 19.880, invocado precisamente por la recurrente, ésta estuvo en condiciones de allegar al procedimiento administrativo todos los documentos y demás elementos de juicio que estimara pertinentes, cosa que no hizo; lo que, en todo caso carece de influencia, pues los hechos por los cuales se le formularon cargos y, en definitiva, sanción, no se han controvertido, sino solo la calificación jurídica de los mismos, los que no pueden ser objeto de prueba.

DECIMO TERCERO: Que, por otra parte, de la simple lectura de la resolución que es objeto de la reclamación, esta se encuentra debidamente fundada y es acorde con los cargos que se formularon, como también se pronuncia sobre que se han indicado y que ahora reitera, cumpliendo con el



estándar de motivación que exigen los artículos 11, 16 y 41 de la Ley N°19.880.

DECIMO CUARTO: Que, por último, el monto de la multa impuesta, según se explicita del motivo décimo noveno, allí se expone cómo llega a determinar el quantum, para lo cual considera, que se trata de dos denuncias y el carácter de reincidente de MEGAMEDIA S.A. En último término, estimándose que la sanción es legal, no procede rebajar aquella que se ha impuesto.

Por estas consideraciones, normas legales citadas, y visto además lo dispuesto en el artículo 34 de la Ley N° 18.838, **se rechaza, sin costas**, el recurso interpuesto por el abogado Ernesto Pacheco González, en representación de “MEGAMEDIA S.A.”, en contra del Ordinario N° 308, de 29 de marzo de 2022, del Consejo Nacional de Televisión.

Redacción de la ministra señora Marisol Andrea Rojas Moya

Regístrese, notifíquese y archívese, en su oportunidad.

Rol N° 173-2022. Contencioso Administrativo

Pronunciada por la **Primera Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago**, presidida por la ministra señora Marisol Rojas Moya e integrada, además, el ministro (S) señor Pedro Advis Moncada y el abogado integrante señor Rodrigo Montt Swett.





YBFHZXHPNX

Pronunciado por la Primera Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago integrada por Ministro Marisol Andrea Rojas M., Ministro Suplente Pedro Pablo Advis M. y Abogado Integrante Rodrigo Antonio Montt S. Santiago, veinticinco de mayo de dos mil veintidós.

En Santiago, a veinticinco de mayo de dos mil veintidós, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.



Este documento tiene firma electrónica y su original puede ser validado en <http://verificadoc.pjud.cl> o en la tramitación de la causa.
A contar del 02 de abril de 2022, la hora visualizada corresponde al horario de invierno establecido en Chile Continental. Para la Región de Magallanes y la Antártica Chilena sumar una hora, mientras que para Chile Insular Occidental, Isla de Pascua e Isla Salas y Gómez restar dos horas. Para más información consulte <http://www.horaoficial.cl>